



EL OBISPO DIOCESANO Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL

JOSE LUIS GUTIERREZ

INTRODUCCIÓN

1. Constituyen el tema de esta exposición las relaciones mutuas entre el Obispo diocesano y la Conferencia Episcopal, de la que es miembro. Como punto de partida, parece conveniente examinar por separado ambas figuras, que hacen referencia al ejercicio del *munus pastorale* correspondiente a los Obispos¹. Por eso, será oportuno encuadrarlas dentro del marco más amplio de los oficios y organismos a través de los cuales llevan a cabo los sagrados Pastores su minis-

1. De la estructura y normas constitutivas de las Conferencias Episcopales trata el Concilio Vaticano II en los nn. 37 y 38 del Decr. *Christus Dominus*, cuyo título es precisamente «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia». Esos números corresponden al Cap. III del citado documento, «De Episcopis in comune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus»: desde un punto de vista sistemático se considera por tanto la Conferencia Episcopal como una de las formas de cooperación de los Obispos al bien común de varias Iglesias particulares, dentro del ámbito del *munus pastorale* que les es propio. En otros de sus textos —concretamente en 20 ocasiones—, el Concilio Vaticano II hace referencia a las Conferencias Episcopales, atribuyéndoles distintas competencias o dirigiéndoles recomendaciones, pero dando ya por supuestas su constitución y sus normas fundamentales: cfr. Decr. *Unitatis redintegratio*, n. 8; Decr. *Christus Dominus*, nn. 18, 24, 35, 41, 42; Decr. *Optatam totius*, nn. 1 y 22; Decl. *Gravissimum educationis*, introducción; Decr. *Ad gentes*, nn. 16, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 32, 33, 38; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 21. Ha de tenerse en cuenta también que estas Conferencias —aunque no siempre con contornos perfectamente definidos— se designan con el nombre de «Episcoporum coetus (territoriales)» en la Const. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 22 y 128, en el Decr. *Inter mirifica*, n. 21 y en la Const. dogm. *Lumen gentium*, nn. 23 y 29.

terio y función de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios, conduciéndolo hacia su destino eterno².

Será también necesario detenernos con especial cuidado en aquellos datos que son de derecho divino, y pertenecen por tanto a la constitución inmutable de la Iglesia. Efectivamente, cualquier forma de organización pastoral debe atenerse siempre a esos límites perennes, a la vez que las circunstancias de los lugares y tiempos permiten o aconsejan la introducción de nuevas formas e instituciones o el cambio de las ya existentes, de manera que respondan con más eficacia a las necesidades de una determinada época o circunscripción.

No se trata, sin embargo, de realizar un estudio exhaustivo —que sobrepasaría con mucho el ámbito de esta ponencia—, sino únicamente de poner en resalte aquellos aspectos que pueden calificarse como un preliminar necesario para determinar la extensión y amplitud de la tarea que corresponde, respectivamente, al Obispo diocesano y a la Conferencia Episcopal, que debe a su vez coordinarse de manera ordenada con los restantes cauces a través de los cuales la Jerarquía de la Iglesia desempeña su misión.

De acuerdo con estas puntualizaciones, trataremos: I.—En primer lugar, de la organización pastoral de la Iglesia en sus líneas esenciales. II.—Después, de los rasgos y función de la Conferencia Episcopal. III.—Seguidamente, del Obispo diocesano en la Conferencia Episcopal, es decir, de su participación en los trabajos y deliberaciones de ésta. IV.—Y, finalmente, de la repercusión e influencia de las deliberaciones de la Conferencia Episcopal en el régimen de cada diócesis por parte de su Obispo propio.

2. La distinción entre el *munus docendi*, *sanctificandi* ac *regendi* no admite contornos nítidos, puesto que el ejercicio de cada una de estas funciones se entrelaza con el de las otras dos. De todas formas, y con esta puntualización, puede afirmarse que el *munus sanctificandi* se desempeña de manera preponderantemente personal y, por lo tanto, la actuación de las Conferencias Episcopales se relaciona de modo casi exclusivo con los munera *docendi* ac *regendi*. Sobre la unión íntima e inseparable de los *tria munera* escribe JUAN PABLO II: «Missio Populi Dei impletur per communicationem muneris et officii Iesu Christi ipsius quod —ut constat— triplicem habet proprietatem: est missio et munus Prophetarum et Sacerdotum et Regis. Si loci conciliares accurate inspiciantur, patet loquendum potius esse de triplici ratione ministerii ac muneris Christi quam de tribus diversis officiis. Haec enim inter se penitus cohaerent ac mutuo pariter explicant, afficiunt, illustrant» (Ep. *Novo incipiente*, 8-IV-1979, n. 3: AAS 71, 1979, pp. 393 ss.). Vid. también J. L. GUTIÉRREZ, voz «Iglesia», en «Gran Enciclopedia Rialp», tomo 12, Madrid 1973, pp. 425 ss.

I. ORGANIZACIÓN PASTORAL DE LA IGLESIA

a) *La potestad suprema*

2. El Romano Pontífice, en virtud de su oficio primacial como sucesor de San Pedro, ejerce sobre toda la Iglesia plena y suprema potestad de jurisdicción, verdaderamente episcopal, ordinaria e inmediata: a la cual todos los Pastores y restantes fieles, cualquiera que sea su rito y dignidad, tanto personalmente como en su conjunto, deben prestar subordinación jerárquica y obediencia, no sólo en lo que se refiere a la fe y a las costumbres, sino también en aquello que pertenece a la disciplina y régimen de la Iglesia extendida por toda la tierra³.

3. Asimismo «el Orden (o Colegio) de los Obispos, que sucede al Colegio Apostólico en el magisterio y régimen pastoral..., junto a su Cabeza —que es el Romano Pontífice— y nunca sin ella, es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, la cual potestad puede ejercerse únicamente con el consentimiento del Romano Pontífice... La potestad suprema sobre la Iglesia universal, que compete a este Colegio, se ejerce de manera solemne en el Concilio Ecuménico... La misma potestad colegial en unión con el Papa puede ejercerse por los Obispos esparcidos en todo el mundo, con tal de que la Cabeza del Colegio (el Romano Pontífice) les llame a la acción colegial o, al menos, apruebe o acepte libremente la acción conjunta de los Obispos dispersos, de manera que el acto se haga verdaderamente colegial»⁴. Sin entrar en más puntualizaciones, bastará tener en cuenta que no es frecuente el ejercicio de la potestad plena y suprema sobre toda la Iglesia mediante actos estricta o propiamente colegiales: son veintiuna las ocasiones en las que se han celebrado Concilios Ecuménicos a lo largo de la historia de la Iglesia; e igualmente —atendiendo al pasado y con vista también al futuro— tampoco parece que pueda preverse en adelante un ejercicio más habitual de la colegialidad en su sentido estricto y propio. Como precisa la *nota explicativa* promulgada junto con la Const. dogm. *Lumen gentium*

3. Cfr. CONC. VAT. I, Const. dogm. *Pastor aeternus*: Denz-Schön., 3050 ss.; CONC. II DE LYON, *Profesión de fe del Emperador Miguel Paleólogo*: *ibid.*, 861; CONC. FLORENTINO, Decr. *Pro Graecis*, *ibid.*, 1307; CIC, can. 218; CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 18; Decr. *Christus Dominus*, n. 2; etc.

4. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 22. Cfr. *Nota explicativa praevia* promulgada con esta Constitución dogmática.

del Concilio Vaticano II, «aunque el Colegio existe siempre, no por ello actúa de modo permanente con acción *estrictamente colegial*, como consta por la Tradición de la Iglesia. En otras palabras, no siempre está *in actu pleno*; más aún, sólo en momentos espaciados en el tiempo (*per intervalla*) obra con acto estrictamente colegial»⁵. Esto justifica que, en adelante y a lo largo de esta exposición, se haga referencia casi exclusiva a la relación entre el Romano Pontífice y el Obispo diocesano, aunque la mayor parte de las consideraciones que se expresan pueden igualmente aplicarse a los supuestos de ejercicio de la colegialidad en sentido estricto, es decir, a aquellos actos realizados por el pleno del Colegio Episcopal, del que es miembro eminente —Cabeza— el Romano Pontífice.

b) *La potestad del Obispo diocesano*

4. Hemos visto que la potestad suprema puede ejercerse tanto por el Romano Pontífice como por todo el conjunto de los Obispos en actuación colegial, con el requisito indispensable de la unión con el Papa, Cabeza del Colegio. Pero pertenece igualmente a la constitución divina de la Iglesia la existencia y función de los Obispos, los cuales «rigen las Iglesias particulares que les han sido encomendadas con sus consejos, exhortaciones y ejemplo, y también con autoridad y potestad sagrada... Esta potestad, que desempeñan personalmente en nombre de Cristo, es propia, ordinaria e inmediata»⁶, y les compete *per se* «en la medida que requiere el ejercicio de su función pastoral»⁷, por lo que «no han de considerarse como vicarios de los Romanos Pontífices, puesto que ejercen una potestad que les es propia»⁸. Y hay que añadir también que esta potestad propia reviste un carácter eminentemente personal, dado que «cada Obispo, puesto a la cabeza de una Iglesia particular, ejercita su régimen pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado, no sobre

5. *Nota explicativa praevia*, 4^a. Vid. la *Relatio doctrinalis* aprobada por la asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos el 22-X-1969: *Enchiridion Vaticanum III*, 1653-1682; S. C. PRO EPISCOPIS, *Directorium de pastorali ministerio Episcoporum*, 22-II-1973, especialmente nn. 50-53.

6. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 27; cfr. CIC, can. 329 § 1. Vid. R. JULIÁN REY, *El Obispo diocesano en la génesis de la «Lumen gentium»*, Pamplona 1977, pp. 119 ss.; A. J. GOMES MARQUES, *O Bispo diocesano na génese do «Christus Dominus»*, Pamplona 1976, pp. 91 ss.

7. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 8, a.

8. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 27.

otras Iglesias o sobre la Iglesia universal»⁹; y «en virtud de esta potestad, los Obispos tienen el sagrado derecho y el deber, del que responden ante Dios, de dar leyes, juzgar y moderar todo lo que se refiere al orden del culto divino y del apostolado»¹⁰. Esta potestad, en su dimensión jurídica, se describe en el Código de Derecho Canónico de 1917 como legislativa, judicial y coactiva¹¹, o como legislativa, judicial y ejecutiva en los esquemas del nuevo Código, actualmente en fase avanzada de preparación; y se configura como un derecho-deber del Obispo diocesano, que habrá de llevar a la práctica con las necesarias dotes de fortaleza y de prudencia, respetando los derechos —también de origen divino— que competen a los fieles encomendados a su atención pastoral¹², moviéndoles al cumplimiento de sus obligaciones y sin dejar nunca de lado que los fieles tienen derecho a ser bien gobernados por quienes, a su vez, tienen derecho a ser bien obedecidos¹³.

c) *Relaciones entre la potestad suprema y el Obispo diocesano*

5. De lo expuesto hasta ahora se desprende la necesidad de perfilar las líneas maestras por las que se rigen las relaciones mutuas entre la suprema potestad y la capitalidad diocesana del Obispo.

Es esclarecedora, a este respecto, la postura que, en el año 1875, adoptaron los Obispos alemanes ante los ataques que, contra el Concilio Vaticano I, lanzó el Canciller Bismarck, quien afirmaba que los términos empleados para proclamar el Primado del Romano Pontífice tenían como consecuencia práctica la absorción por el Papa de toda la potestad episcopal en la Iglesia, hasta el punto —afirmaba el Canciller en una Circular— de que los Obispos quedaban reducidos a instrumentos suyos, desprovistos de cualquier responsabilidad propia y servidores del más absoluto de los monarcas.

En una declaración colectiva, que mereció plena alabanza por parte de Pío IX¹⁴, los Obispos de Alemania afirmaban que «en modo al-

9. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 23.

10. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 27.

11. Cfr. CIC, can. 335 § 1.

12. Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *El principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fieles*, en «Ius Canonicum» 11 (1971), pp. 413-444; Id., *I diritti dei «christifideles» e il principio di sussidiarietà*, en «Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio», vol. II/2, Milano 1972, pp. 785-796.

13. Cfr. J. HERRANZ, *Autorità, libertà e legge nella comunità ecclesiale*, en «La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa», Firenze 1969, p. 99.

14. Cfr. Litt. Ap. *Mirabilis illa constantia*, 4-III-1875: Pii IX Acta 1/VII, pp. 29 ss.; Alocución a los Cardenales, 15-III-1875: ASS 8 (1874-75), p. 303.

guno puede el Papa considerarse un monarca absoluto, pues está subordinado al derecho divino y sometido a lo que Cristo ha dispuesto para la Iglesia. No puede modificar la constitución de la Iglesia, dada por el divino Fundador, a la manera de un legislador civil, que tiene capacidad para cambiar la constitución del Estado. La constitución de la Iglesia, en todos sus elementos esenciales, se funda en la ordenación divina, y queda por tanto inmune de cualquier arbitraria disposición humana. En virtud de la misma institución divina, en la que se funda el oficio del Papa, existe también el episcopado, al que competen derechos y deberes que provienen de la disposición dada por Dios mismo, y el Sumo Pontífice no tiene derecho ni potestad de modificarlos»¹⁵.

Tanto el Pontificado Supremo como el episcopado son de derecho divino y pertenecen a la constitución de la Iglesia, por lo que deben conjugarse armónicamente, de manera que la actuación de uno no sólo no sea obstáculo para el otro, sino que juntos concurren al buen gobierno del pueblo de Dios, según el querer fundacional de Cristo. El poder de cada Obispo en su propia diócesis se ejerce —como leemos en el Decr. *Christus Dominus*— «quedando a salvo, siempre y en todo, la potestad que, en virtud de su oficio, tiene el Romano Pontífice de reservar ciertas causas a sí mismo o a otra autoridad»¹⁶; y enunciando con más riqueza de matices y con mayor precisión esta misma idea, afirma la Const. dogm. *Lumen gentium* que «el ejercicio de la potestad episcopal queda regido en último término por la autoridad suprema de la Iglesia, que puede circunscribirla dentro de ciertos límites, en razón de la utilidad de la Iglesia o de los fieles»¹⁷.

15. «Aber abgesehen hiervon kann die Bezeichnung eines absoluten Monarchen auch in Beziehung auf kirchliche Angelegenheiten auf den Papst nicht angewendet werden, weil derselbe unter dem göttlichen Rechte steht und an die von Christus für seine Kirche getroffenen Anordnungen gebunden ist. Er kann die der Kirche von ihrem göttlichen Stifter gegebene Verfassung nicht ändern wie der weltliche Gesetzgeber eine Staatsverfassung ändern kann. Die Kirchenverfassung beruht in allen wesentlichen Punkten auf göttlicher Anordnung und ist jeder menschlichen Willkür entzogen. Kraft derselben göttlichen Einsetzung, worauf das Papsttum beruht, besteht auch der Episkopat; auch er hat seine Rechte und Pflichten vermöge der von Gott selbst getroffenen Anordnung, welche zu ändern der Papst weder das Recht noch die Macht hat» (Denz.-Schön., 3114-3115).

16. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 8, a; PABLO VI, Motu pr. *De Episcoporum muneribus*, 15-VI-1966: AAS 58 (1966), pp. 467 ss.

17. «Haec potestas qua, nomine Christi (Episcopi) personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatum regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit» (CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen*

En el párrafo que acabo de citar vale la pena subrayar las palabras finales «en razón de la utilidad de la Iglesia o de los fieles», pues explican el motivo por el cual la Autoridad Suprema puede y debe reservar a su exclusiva competencia algunas causas que, *de por sí*, podrían corresponder al Obispo diocesano: existe en la Iglesia, por institución divina, una Autoridad Primacial que, además de ejercer aquellas funciones que le corresponden con carácter inalienable, ha de determinar también en las distintas circunstancias históricas cuáles son las materias para las que el bien de la Iglesia o de los fieles postula una regulación común y unitaria o, en su caso, una intervención directa del Romano Pontífice, bien sea personalmente bien a través de sus organismos vicarios. En otras palabras, para cada época histórica el bien común de la Iglesia exige un grado de centralización en el ejercicio de la potestad eclesiástica, grado cuya determinación —atendiendo a la utilidad de la Iglesia o de los fieles— corresponde en exclusiva a la autoridad del Romano Pontífice.

6. La posibilidad de una oportuna descentralización fue precisamente uno de los aspectos que constituyeron objeto de estudio por

gentium, n. 27). W. ONCLIN (*The Power of decision in the Church at the supra-diocesan level*, en «Communications» 2, 1970, pp. 197-212) escribe: «The mission of the supreme authority in the Church consists primarily in maintaining and preserving the unity of faith and communion of the episcopate and of the entire Church, and thus this authority has all the required power to insure this unity and to see to the demands of the unity and universality of the Church, as desired by Christ. Since it is responsible for the well-being of the entire Church and of each of the particular Churches, it also has the right to intervene in the particular Churches, in which the Church of Christ is realized, but only in as much as the government of these particular Churches cannot be assured, or is not assured by the bishops who are responsible for its daily care. The maintaining of the unity of faith and communion is certainly the primary objective of the power of the supreme authority; intervention in the government of particular Churches constitutes the secondary object of this same power» (p. 203). Desglosando este principio, señala a continuación los siguientes aspectos: a) tutela y defensa de la unidad de fe y de comunión entre los Obispos y en la Iglesia universal; b) decisiones sobre temas que requieren una normativa común para la Iglesia universal; c) decisiones que miran a confirmar y fortalecer la autoridad de cada Obispo en su propia diócesis, y a asegurar que éste cumpla diligentemente sus deberes; d) determinar qué cuestiones deben regularse de manera uniforme en asambleas de Obispos (Concilios particulares, Conferencias Episcopales, etc.); e) fomentar la cooperación mutua entre las distintas Iglesias particulares (pp. 203-207). Vid. también J. HERVADA, *Estructura y principios constitucionales del gobierno central*, en «Ius Canonicum» 11 (1971), pp. 11-54; Id., *El Romano Pontífice*, en la obra colectiva, preparada por la Redacción de «Ius Canonicum», *El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia*, Pamplona 1971, pp. 164-179.

parte de los Padres conciliares, tanto en el período preparatorio como durante las sesiones del Vaticano II. Fruto de esa reflexión fueron no sólo los enunciados que se contienen sobre todo en la Const. dogm. *Lumen gentium* y en el Decr. *Christus Dominus*, sino también varios documentos pontificios promulgados durante la celebración del Concilio o en los años inmediatamente sucesivos.

En esos textos puede distinguirse una doble línea:

— En primer lugar, una desconcentración de atribuciones que hasta entonces correspondían a la Curia Romana, y se transfieren a partir de ese momento a cada Obispo para su propia diócesis. Puede servir de ejemplo el Motu pr. *Pastorale munus*, del 30-XI-1963, con el que Pablo VI concede a los Obispos una amplia serie de prerrogativas, de manera que, desde entonces, no tuvieran que recurrir a Roma en cada caso para otorgar bastantes facultades y dispensas reservadas a la Sede Apostólica. En la introducción de ese documento, el Papa afirma: «Ahora, cuando está a punto de concluir la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, y siendo nuestro mayor deseo dar a los Padres conciliares testimonio concreto de la gran estima que sentimos hacia todos los venerables hermanos en el Episcopado, hemos querido acoger gustosamente sus peticiones, y concederles aquellas cosas que colocan en su justo lugar la dignidad episcopal y, a la vez, hacen más fácil y eficaz el desempeño de su función pastoral»¹⁸. Y en los principios directivos que habrían de seguirse por la Comisión Pontificia encargada de la reforma del CIC, aprobados el 7-X-1967 en la primera asamblea general del Sínodo de los Obispos, se lee: «La potestad es ciertamente una, y reside en el Superior, tanto Supremo como menor, es decir, en el Romano Pontífice y en los Obispos diocesanos, y es completa en su ámbito respectivo. El hecho de que, para el servicio de la comunidad que le ha sido confiada, la potestad competa enteramente a cada uno, refuerza la unidad de ésta,

18. Cfr. AAS 56 (1964), pp. 5-12. Aplicando el principio contenido en el Decr. *Christus Dominus*, n. 8, b), la facultad de dispensar quedó sucesivamente regulada por Pablo VI mediante el Motu pr. *Dē Episcoporum muneribus*, 15-VI-1966 (AAS 58, 1966, pp. 467-472), en cuya introducción, como fundamento doctrinal, se afirma: «De Episcoporum muneribus doctrina, quam Nobis feliciter contigit in Concilio Oecumenico Vaticano II sollemni ritu promulgare, perspicue tradit, Ecclesias particulares ab Episcopis, quibus tamquam Christi legatis conceditae sunt, auctoritate et sacra potestate regi; iisdemque pastorale officium —hoc est constantem et cotidianam ovium curationem— committi cum potestate propria, ordinaria et immediata». Vid. también PABLO VI, Motu pr. *Episcopalis potestatis*, 2-V-1967, sobre la facultad de dispensar por parte de los Obispos de las Iglesias orientales: AAS 59 (1967), pp. 385-390.

y no puede dudarse de que contribuirá en gran medida a la cura pastoral de los súbditos»¹⁹. Puede afirmarse, por tanto, que las disposiciones conciliares y la normativa promulgada sucesivamente, así como también los principios que habrán de seguirse en la elaboración del nuevo CIC, tienden de modo claro a reforzar la potestad y la autoridad de cada Obispo en su propia diócesis. Y asimismo se hace constar de manera inequívoca la *ratio legis*: facilitar y hacer más eficaz el desempeño de la tarea pastoral del Obispo.

— En segundo lugar, junto a la desconcentración de atribuciones y consiguiente aumento de la potestad episcopal en la diócesis, se advierte también una tendencia a que haya una mayor comunicación entre los organismos del gobierno central de la Iglesia y los Obispos diocesanos, de modo que éstos participen en la medida de sus posibilidades en el trabajo y decisiones de los distintos Dicasterios. A este respecto debe citarse en primer lugar la institución por Pablo VI del Sínodo de los Obispos, mediante el Motu pr. *Apostolica sollicitudo*, del 15-IX-1965²⁰, así como también el nombramiento de algunos Obispos diocesanos como miembros de los Dicasterios de la Curia Romana, «para que puedan informar al Sumo Pontífice con mayor profundidad sobre la mentalidad, deseos y necesidades de todas las Iglesias»²¹.

d) *Personas y organismos intermedios entre la potestad suprema y el Obispo diocesano*

7. Hemos considerado hasta ahora los dos polos en torno a los cuales, por institución divina, gira la organización pastoral de la Iglesia: la función primacial del Papa y la capitalidad del Obispo en su propia diócesis. Sin embargo, las exigencias de una regulación uniforme han motivado que, a lo largo de la historia, junto a las intervenciones del poder supremo —en la persona del Papa y de sus organismos vicarios—, surgieran también otros oficios y órganos que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, ejercen una función supradiocesana. Examinaremos algunas de estas figuras, con la fina-

19. Principio n. 6: «Communicationes» 1 (1969), p. 82. Cfr. P. FELICI, Discurso del 18-I-1974 en Viena: «Communicationes» 6 (1974), pp. 111-112.

20. AAS 57 (1965), pp. 775-780. Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 5; PABLO VI, *Discurso*, 18-XI-1965, en la octava sesión pública del Concilio Vaticano II.

21. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 10; PABLO VI, Motu pr., *Pro comperto sane*, 6-VIII-1967: AAS 59 (1967), pp. 881-884; PABLO VI, Const. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15-VIII-1967, n. 2 § 2.

lidad exclusiva de precisar cuál es la fuente de la que procede el poder que les capacita para tomar decisiones que obligan moralmente, y en ocasiones también jurídicamente, a aquellos Obispos diocesanos a los que afectan.

8. En la Iglesia Oriental goza de gran importancia la figura del Patriarca, que «tiene potestad ordinaria en todo el Patriarcado, con el consiguiente derecho y deber de ejercer su jurisdicción —según los cánones y las costumbres legítimas— sobre los Obispos, los clérigos y los fieles»²². Acerca del origen de esta jurisdicción supradiocesana, el Código oriental actualmente vigente afirma de manera taxativa que gozan de ella los Patriarcas por concesión del Papa. Se lee en el can. 216 § 1 «De Ritos y Personas»: «Según el uso antiquísimo de la Iglesia, son dignos de especial honor los Patriarcas de Oriente, que con amplísima potestad, *que les ha sido otorgada o atribuida por el Romano Pontífice*, presiden su patriarcado o rito a manera de padre y cabeza»²³.

9. En el Derecho de la Iglesia de rito latino existe la figura del Patriarca y del Primado, con prerrogativas meramente honoríficas, pero sin ninguna jurisdicción²⁴. Distinto es el caso del Metropolitano, que —al menos con carácter supletorio— puede realizar actos de verdadera jurisdicción en las diócesis sufragáneas²⁵: se trata en este supuesto del ejercicio de unas atribuciones que le confiere el Derecho, es decir, de una delegación o desconcentración por parte de la Autoridad suprema, que encomienda a un Arzobispo ciertas funciones sobre las diócesis que de él dependen.

10. Prevé también el CIC la celebración de Concilios plenarios —a los que asisten Obispos de varias provincias eclesiásticas— y de los Concilios provinciales, presididos por los respectivos Metropoli-

22. Código Oriental de Ritos y de Personas, promulgado por Pío XII con el Motu pr. *Cleri sanctitati*, 2-VI-1957, can. 240 § 1; cfr. can. 216 § 2, 1.º Vid. también CONC. VAT, II, Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, nn. 7-11; E. EID, *La figure juridique du Patriarche*, Roma 1962.

23. Motu pr. *Cleri sanctitati*, cit., can. 216 § 1 (el subrayado es nuestro). Cfr. también el can. 306 § 2, 4.º, donde se habla de los derechos y obligaciones *que el Derecho atribuye al Patriarca*, con la limitación de que ha de ejercerlos siempre personalmente, sin posibilidad de nombrar un Vicario general (cfr. *ibid.*, can. 241).

24. Cfr. CIC, can. 271.

25. Cfr. CIC, can. 274.

tanos²⁶. En ambos casos, los asistentes gozan de voto deliberativo, pero sus decisiones no pueden promulgarse antes de que hayan sido examinadas y revisadas por la Santa Sede, y sólo en ese momento adquieren valor obligatorio para todas las diócesis de las que se trate²⁷.

11. Los supuestos brevemente examinados hasta ahora —a los que pueden añadirse otros semejantes: p. ej., los tribunales eclesiásticos

26. Cfr. CIC, can. 281 ss.; CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 36; W. ONCLIN, *Les perspectives de mise en place d'un droit particulier local*, en «L'Année Canonique» 23 (1979), pp. 265 s.

27. Cfr., p. ej., el Breve de Pablo V, con el que *se aprueban* las decisiones tomadas por el Concilio provincial de Malinas del año 1607, advirtiendo expresamente que *se han introducido enmiendas en su texto*, y prescribiendo con *autoridad apostólica* que se observen fiel y diligentemente: «Acta Synodi provincialis Mechliniensis... nonnullis mutatis, ut videbitis, approbavimus... Quemadmodum etiam hortamur, atque apostolica auctoritate... iubemus, ut huius Synodi decreta omnia... ab omnibus quam diligentissime et inviolate serventur» (MANSI 34 B, 1475 s.). Asimismo, en la publicación del Concilio Bituricense (Bourges), de 1584, se hace constar: «accepimus tandem concilii nostri provincialis, nuper Biturigibus celebrati, decreta et statuta Sanctae Sedis iudicio probata» (MANSI 34 B, 938). Etc. Por otra parte, el hecho de que en el Código de 1917 los cánones sobre los Concilios particulares se encuentren bajo el título VII «De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes» ha facilitado que los autores se limiten a comentar de pasada que la jurisdicción de esos Concilios es una de las formas de participación en la potestad suprema. Así escriben: «Sicut Patriarchae, Primates et Metropolitae iure ecclesiastico constituunt gradum intermedium in hierarchia iurisdictionis inter Primatum R.P. et gradum episcopalem, ita eodem iure interpositi sunt coetus seu collegia Praelatorum ad extraordinarium regimen ecclesiasticum, quae Concilia particularia dicuntur, et iurisdictionem exercent iurisdictione singulorum Episcoporum superiorem, a Rom. Pontifice mutuam, cum ab eo, qui supremam in Ecclesia tenet potestatem, necessario sit recipienda» (F. X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, t. II, 3.^a ed., Roma 1943, p. 669). Y, más recientemente, U. BESTE: «apte Codex materiam sectionis II *De clericis in specie* in duos titulos dispertit, disserendo in praesenti titulo (VII) de suprema potestate pontificatus ex iure divino et de gradibus qui hanc potestatem participatam iure ecclesiastico exercent» (*Introductio in Codicem*, 6.^a ed., Napoli 1964, p. 239). Sin embargo W. ONCLIN (*The power...*, cit., pp. 210-211) no duda en afirmar que, después del Concilio Vaticano II, «there is no doubt that the power which bishops exercise in particular councils, as in episcopal conferences, is not a power granted by the supreme authority, but the episcopal power which is theirs in their particular Churches... (Sometimes) the exercise of this episcopal power will be collective, so that the various bishops of a province, region or nation exercise their power jointly for all the dioceses concerned». A pesar de la convicción con la que W. Onclin sostiene este punto de vista, no parecen suficientemente persuasivas las razones que aduce.

de segunda instancia²⁸, la posibilidad de constituir tribunales eclesiásticos regionales²⁹, etc.—, permiten concluir que toda jurisdicción supradiocesana inferior a la potestad suprema es de origen meramente eclesiástico, asentado a veces en una larga tradición, y proviene de una costumbre legítima, de un poder otorgado por la ley o —siempre y en última instancia— de una concesión expresa o tácita del Romano Pontífice.

12. Como un paso más para determinar la naturaleza y funciones propias de la Conferencia Episcopal, conviene tener presente que su estructura y normas constitutivas se contienen en el Cap. III, «De Episcoporum in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus» del Decreto conciliar *Christus Dominus* sobre el ministerio pastoral de los Obispos en la Iglesia, y más precisamente en su apartado I, «Synodi, Concilia et praesertim Episcoporum Conferentiae», donde no sin una intención precisa se ha añadido el adverbio *praesertim* antes de *Episcoporum Conferentiae*, para que quede claro que son éstas el tema principal del que se va a tratar. Se hace referencia a los Sínodos, Concilios provinciales y Concilios plenarios en el n. 36 del Decreto, y a las Conferencias Episcopales en los nn. 37-38. Prescindiendo de los Sínodos patriarcales, institución típica de la Iglesia de rito oriental, parece muy oportuno dejar constancia de un hecho: el Concilio Vaticano II expresa en el lugar citado su deseo de que la venerable institución de los Concilios provinciales —de los Obispos sufragáneos con el Metropolitano— y plenarios —es decir, de varias provincias eclesiásticas —no sólo se conserve, sino que adquiera un vigor renovado, para proveer de modo más eficaz a las necesidades de las correspondientes Iglesias particulares. ¿En qué sentido debe entenderse este deseo manifestado de manera tan taxativa, cuando en el número siguiente del mismo Decreto (n. 37) se estima sumamente oportuna la constitución de Conferencias Episcopales en todo el mundo?³⁰. Podría parecer que la Conferencia Episcopal substituye con ventaja a los Concilios provinciales o plenarios, hasta el punto de que

28. Cfr. CIC, can. 1594 ss.

29. Cfr. Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, *Normae pro Tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28-XII-1970: AAS 63 (1971), pp. 486-492. Citando la Const. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15-VIII-1967, n. 105 (AAS 59, 1967, p. 921), el Art. 1 de estas normas recuerda que la erección de tribunales supradiocesanos es de competencia de la Santa Sede, concretamente de la Signatura Apostólica.

30. Su constitución se prescribe de manera taxativa en el Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, 6-VIII-1966, I, n. 41 § 1.

la celebración de éstos resultaría inútil, por constituir un duplicado innecesario³¹. Sin embargo no es así, al menos teóricamente, puesto que, como hemos hecho notar, el Concilio Ecuménico recomienda con insistencia la celebración de Concilios particulares, y a la vez considera sumamente deseables las Conferencias Episcopales. Así las cosas, parece obligada una conclusión: los Concilios particulares y las Conferencias Episcopales son instituciones distintas, que cumplen una función complementaria y diversa dentro del ámbito de la cooperación de los Obispos al bien común de varias Iglesias particulares.

13. Comenzaremos por los Concilios particulares. Afirma el n. 36 del Decr. *Christus Dominus* que, ya desde los primeros siglos, los Obispos determinaron en ellos un modo de proceder común, tanto respecto a la enseñanza de las verdades de la fe, como a la disciplina eclesiástica. Y, casi con idénticas palabras, al manifestar el deseo de que los Concilios particulares adquirieran un vigor renovado en nuestros días, el texto del Vaticano II les asigna una finalidad precisa: «*quo aptius et efficacius fidei incremento disciplinaeque conservationi in variis Ecclesiis, pro temporum adiunctis, provideatur*; que se provea de modo más apto y eficaz al incremento de la fe y a la tutela de la disciplina en las distintas Iglesias, atendiendo a las circunstancias de los tiempos»³².

Fe y disciplina eclesiástica, con potestad legislativa en este segundo supuesto, dentro de su correspondiente circunscripción: éste es el campo —ciertamente amplio— de los Concilios particulares. Para precisar su extensión, será oportuno tener en cuenta que, como norma general, estos Concilios no son frecuentes, sino que, en el mejor de los casos, se celebran con un intervalo largo de tiempo: concretamente, el Código de 1917 no determina ninguna periodicidad para el Concilio plenario³³, y establece que el provincial tenga lugar «por lo menos cada veinte años»³⁴. El proyecto del nuevo CIC prevé que tanto el Concilio plenario —al que llama *regional*— como el provin-

31. Esta cuestión se estudió nuevamente durante los trabajos de la Comisión Pontificia para la revisión del CIC: cfr. W. ONCLIN, *Opera Consultorum in parandis canonum schematibus*, informe sobre el esquema «De Sacra Hierarchia»: «Communicationes» 4 (1972), pp. 47-48.

32. Este enunciado recuerda muy de cerca la descripción que en el Código de 1917, can. 290, se hace sobre las materias de las que debe tratarse en los Concilios particulares.

33. Cfr. can. 281. Puede citarse como ejemplo práctico que en los Estados Unidos de América los tres Concilios plenarios de Baltimore se celebraron en el siglo pasado, concretamente en los años 1852, 1866 y 1884.

34. CIC, can. 283.

cial se celebrarán cuando parezca necesario o útil, respectivamente, a la Conferencia Episcopal o a la mayor parte de los Obispos diocesanos de una misma provincia, sin descender a más detalles sobre su periodicidad ³⁵.

Por lo tanto, la normativa actualmente vigente y el proyecto del nuevo CIC parecen atribuirles la elaboración de declaraciones y decretos no circunstanciales, o debidos a acontecimientos de por sí transitorios que exigen una solución inmediata, sino dotados de estabilidad y tendencialmente permanentes por lo que se refiere a su aplicación.

La Comisión Pontificia para la reforma del CIC resalta también el hecho de que debe darse mayor importancia al Concilio regional (o plenario) que al provincial, puesto que en el presente serán pocas las cuestiones de fe y de disciplina eclesiástica que no necesiten una regulación uniforme en el ámbito de la nación, pero sí en el de una provincia eclesiástica ³⁶.

35. El texto de los dos primeros cánones sobre los Concilios particulares en la última redacción publicada del proyecto del Libro «De populo Dei» es el siguiente:

«Can. 189. § 1. Concilium regionale, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem Conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum Conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur.

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam de Concilio provinciali celebrando in provincia ecclesiastica cuius termini cum territorio nationis coincidunt».

«Can. 190. § 1. Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 189, § 2.

§ 2. Sede metropolitana vacante, Concilium provinciale ne convocetur» («Communicationes» 12, 1980, pp. 255-257).

Se prevé también que a los Concilios particulares deben ser convocados, aunque sólo con voto consultivo, todos los Vicarios generales y episcopales, Superiores mayores religiosos, Rectores de Universidades católicas, Decanos de las Facultades de teología y de derecho canónico, y otros presbíteros y laicos (can. 193: *ibid.*, pp. 259-260).

Las razones aducidas para la conservación de los Concilios particulares pueden verse en «Communicationes» 4 (1972), pp. 47-48: entre ellas cabe destacar que, de acuerdo con el pensamiento de la Comisión Pontificia para la reforma del CIC, la Conferencia Episcopal goza de una cierta potestad legislativa, pero mucho más restringida que la correspondiente a los Concilios particulares; y que, además de la cooperación habitual y mutua de los Obispos en la Conferencia Episcopal, parece necesario hacer un balance más profundo de las necesidades de la región o provincia eclesiástica, en el que tomen parte no sólo los Obispos, sino también bastantes otras personas, que no pueden ser convocadas a cada sesión de la Conferencia. Vid. también W. ONCLIN, *Les perspectives...*, cit., p. 271.

36. Cfr. W. ONCLIN, *Opera consultorum*, cit., p. 45.

14. Antes de seguir adelante, considero necesario puntualizar que las consideraciones expuestas hasta ahora (cfr. n. 13) sobre los Concilios particulares se atienen rigurosamente —así lo espero— a las prescripciones conciliares contenidas en el Decr. *Christus Dominus* y a la pauta marcada por la Comisión Pontificia para la reforma del CIC. Sin embargo, la realidad no parece corresponder a esos enunciados, porque tanto antes como después del Concilio Vaticano II la actividad de los Concilios particulares puede considerarse prácticamente inexistente³⁷, y nada indica que en un futuro próximo las cosas vayan a discurrir por otro cauce³⁸.

¿Cuál es, entonces, la realidad? Parece que no es aventurado afirmar que, sea cual sea la legislación vigente, la competencia que se atribuye a los Concilios particulares está siendo ejercitada de hecho por las Conferencias Episcopales, y que este estado de cosas se ha consolidado hasta el punto de que —limitándonos a dejar constancia de una situación, sin entrar en juicios de valor— puede calificarse como muy difícilmente reversible, ya que la reunión frecuente y periódica de los Obispos en la Conferencia Episcopal hace que no se experimente la necesidad de otra asamblea paralela, para la que, por otra parte, se requiere la venia de la Santa Sede cuando se trate de Concilios regionales (plenarios) o de Concilios provinciales de una provincia eclesiástica que comprenda todo el territorio de una nación.

¿Han sido entonces inútiles o bizantinas las consideraciones expuestas hasta ahora sobre los Concilios particulares? ¿Pueden calificarse como una mera *quaestio elegans*, apoyada, sí, en los textos conciliares y legislativos, pero sin ningún fundamento en la realidad? Pienso que no, porque a la hora de determinar la naturaleza y funciones de una Conferencia Episcopal, se habrá de tener en cuenta

37. Es un testimonio elocuente el hecho de que, en la abundante legislación promulgada después del Concilio Vaticano II, sólo haya una referencia a los Concilios particulares: la contenida en los nn. 50 y 84 de la Const. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15-VIII-1967, donde se determina la competencia de las S.C. para los Obispos y para la Evangelización de los pueblos sobre los mismos. El Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, 6-VIII-1966, donde se dan normas ejecutivas acerca del Decr. conciliar *Christus Dominus* nada dice de ellos. El *Directorio* «de pastorali ministerio Episcoporum», 22-II-1973, de la S.C. para los Obispos, n. 213, se limita a repetir la recomendación del Decr. *Christus Dominus*, n. 36.

38. Se plantea aquí un problema que la ciencia jurídica considera sobre todo en el ámbito de la teoría general y de la filosofía del derecho, así como también en los tratados de derecho constitucional y de derecho internacional: el problema de la *efectividad* de un ordenamiento, en nuestro caso, el canónico. Ante la inminencia de la promulgación del nuevo CIC, considero que este tema debe ser objeto de estudio detallado por parte de la ciencia canónica.

que sigue abierta la posibilidad de celebrar Concilios particulares, pero que frecuentemente la competencia que se les atribuye quedará asumida como una función más, entre otras que le corresponden en virtud del derecho, por la Conferencia Episcopal, que desempeñará así un doble papel: el que le es propio en virtud de sus normas constitutivas y el que pertenece a los Concilios particulares. De aquí surgirá la necesidad de adaptar a las Conferencias Episcopales, con las acomodaciones debidas, la legislación prevista para los Concilios particulares, tema en el que no me parece oportuno entrar en este momento.

II. LA CONFERENCIA EPISCOPAL

a) *Naturaleza y funciones*

15. Afirma el Concilio Vaticano II en el n. 37 del Decr. *Christus Dominus*: «Especialmente en los tiempos actuales, son bastantes las ocasiones en las que los Obispos no alcanzan a cumplir conveniente y fructuosamente su tarea, si no actúan en unión cada vez más estrecha con otros Obispos. Puesto que las Conferencias Episcopales —que se han constituido ya en muchas naciones— han dado pruebas de un apostolado más fecundo, este Sacrosanto Concilio considera muy conveniente que, en todas partes, los Obispos de una misma nación o región se reúnan cada cierto tiempo, para que, comunicándose las luces de la prudencia y de la experiencia e intercambiándose pareceres, haya una unión de fuerzas en vistas al bien común de las Iglesias particulares»³⁹. E indica más adelante que: «La Conferencia Episcopal es como una reunión en la cual los Obispos de una nación o territorio ejercen unidos su tarea pastoral, para promover de manera más eficaz el bien que la Iglesia procura a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado que correspondan a las circunstancias concretas de cada tiempo»⁴⁰.

¿Cómo deben entenderse estos textos conciliares? La respuesta a esta pregunta exige tener en cuenta el mandato contenido en el n. 44 del Decr. *Christus Dominus*: «Manda este Sacrosanto Concilio que, al revisar el Código de Derecho Canónico, se establezcan las leyes convenientes, de acuerdo con los principios contenidos en este Decreto y teniendo también en cuenta las observaciones expuestas por las Co-

39. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 37.

40. *Ibid.*, n. 38, 1.

misiones o por los Padres conciliares». Es ésta la única ocasión en la que el Concilio Vaticano II ordena *expresamente* que el contenido integral de uno de sus Decretos se formalice en el nuevo CIC, añadiendo además una pauta de gran importancia: se habrá de atender no sólo al enunciado escueto del texto conciliar, sino también a las observaciones propuestas, de palabra o por escrito, en las sucesivas redacciones del proyecto, tanto por la Comisión que lo preparó como por los restantes Padres conciliares⁴¹.

Atendiendo a estos criterios, puede afirmarse que, si exceptuamos el apartado 4 del n. 38 del Decr. *Christus Dominus*, donde se habla de decisiones jurídicamente obligatorias para todos los que forman parte de una Conferencia Episcopal, las demás normas constitutivas de las Conferencias se refieren prevalentemente a un intercambio de pareceres y de experiencias entre los Obispos, para llegar de este modo a una unidad en lo fundamental, que corresponderá a cada Obispo, con su personal autoridad, hacer realidad en su propia diócesis⁴². Son varias las razones que llevan a esta conclusión, y todas se desprenden de los proyectos a través de los cuales se llegó al texto promulgado del Decr. *Christus Dominus*, por lo que gozan del peso que les atribuye el mandato contenido en el n. 44 del Decreto conciliar, al que acabo de referirme:

a) en primer lugar, el origen histórico de las Conferencias Episcopales, que surgen el siglo pasado como «privata conferenza» o «riunioni amichevoli di Prelati», es decir, como reuniones informales de los Obispos, sin ninguna potestad ni autoridad para tomar decisiones colectivas⁴³;

41. Sobre la discusión en las sesiones conciliares es particularmente importante el trabajo de N. JUBANY, *Las Conferencias Episcopales y el Concilio Vaticano II*, en «Ius Canonicum» 5 (1965), sobre todo pp. 351-359: se trata de una conferencia pronunciada en la Universidad de Navarra el 24-V-1965 —pocos meses antes de la conclusión del Vaticano II— por Mons. N. Jubany, miembro de la Comisión conciliar que se encargó de la elaboración del Decr. *Christus Dominus* y ponente ante el Concilio del cap. II de este Decreto. Vid. también R. JULIÁN REY, o.c., pp. 171-183; A. J. GOMES MARQUES, o.c., pp. 200-237.

42. La actual facilidad de comunicaciones y la información a través de los órganos de opinión pública hacen que, hoy más que nunca, cada diócesis no pueda considerarse un recinto cerrado e incommunicable, y que deba evitarse el peligro del que hablaba Pío XII en su Discurso a los Cardenales del 2-XI-1954, es decir, la «christifidelium admiratio, qui saepe non intelligunt cur in alia dioecesi res hoc modo se habeant, in alia autem, quae fortasse proxima ei adiacet, dissimili modo, quin etiam interdum prorsus contrario» (AAS 46, 1954, p. 675).

43. Cfr. la nota histórica que figura en el proyecto de Decreto conciliar «De Episcopis ac de Dioecesium regimine» (así se llamó en un primer momento el

b) una segunda razón es la lista de cuestiones que, a modo de ejemplo, se proponen en documentos de la Santa Sede y se someten a la consideración de los Padres en el Concilio Vaticano II como posibles temas para ser tratados en la Conferencia de Obispos ⁴⁴;

c) finalmente, la nota aclaratoria del n. 37 del Decr. *Christus Dominus*, que figura en distintas redacciones del proyecto, incluso en la que precede inmediatamente a su promulgación, pero desapareció sin embargo en el texto definitivo, y en la cual se lee: «Hay asuntos que exigen un modo común de proceder por parte de todos los Obispos, principalmente cuando su alcance es de nivel nacional: p. ej., las cuestiones acerca de la enseñanza, temas administrativos, normas morales sobre el uso de los derechos civiles, etc. Además, hay ocasiones en las que deben hacerse declaraciones públicas en nombre de todos los Obispos, algunas de las cuales revisten mucha importancia, como son aquellas que pueden afectar en gran medida la opinión pública, o suscitar perplejidad en los fieles, o apartarse demasiado del común sentir y modo de obrar, o que pueden estar en contradicción con declaraciones sobre las mismas materias hechas quizás por Conferencias Episcopales de regiones limítrofes, etc.» ⁴⁵. Esta nota se suprimió sin ninguna explicación, probablemente porque podía dar a entender que era tarea exclusiva de las Conferencias emitir declaraciones doctrinales, lo cual habría falseado el pensamiento conciliar, como tendremos ocasión de ver más adelante.

En este contexto, las prescripciones de los nn. 37 y 38 del Decr. *Christus Dominus* parece que deben centrarse en la mutua comunicación de experiencias e intercambio de pareceres por parte de los

Decr. *Christus Dominus*, «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia»), del 22-IV-1963, p. 17 (*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, II, IV, pp. 374 s.), donde se enumeran bastantes documentos pontificios a partir de la Ep. *Maxima quidem* de Pío IX, del 19-VIII-1864, a los Obispos de Baviera, en la que se aconseja su celebración anual (Pii IX Acta, pars I, vol. III, p. 674). Sobre este aspecto, cfr. M. COSTALUNGA, *De Episcoporum Conferentiis*, en «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 57 (1968), pp. 217 ss.

44. El proyecto del Decr. *Christus Dominus* citado en la nota anterior aduce como ejemplo la Instr. *Quo constet firmitus*, a los Obispos del Imperio Austríaco, del 22-VII-1898 (Leonis XIII Acta 18, p. 98): cfr. *Acta Synodalia...*, II, IV, p. 375.

45. Esta nota —la n. 1 del cap. III— se refiere al n. 37 del Decreto, después de las palabras «coniunctiorem operam efficiant»: cfr. *Schema Decreti «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia». Textus recognitus et modi*, entregado a los Padres conciliares el 16-IX-1965, es decir, 42 días antes de la promulgación del Decreto (28-X-1965), y sometido a votación (*Acta Synodalia*, IV, II, p. 604).

Obispos de una misma región, con el fin de lograr una mayor unidad que redundará en el bien común de las Iglesias particulares. Se trata por tanto, y primariamente, de una expresión institucionalizada no de la colegialidad en su sentido estricto, sino del *affectus collegialis*, es decir, del sentido de unión que han de experimentar entre sí los Obispos en el desempeño de la propia tarea, y que lógicamente habrá de manifestarse en primer término respecto a aquellos que se encuentran dentro del mismo marco geográfico, para imprimir un rumbo común a la función pastoral y evitar incluso la apariencia de una actividad exclusivamente individual o que prescinda de los demás, y más aún de una sombra de división.

b) *Decisiones de la Conferencia jurídicamente obligatorias*

16. Las reflexiones anteriores se complementan necesariamente con otro dato: la Conferencia Episcopal puede *también*, en determinados supuestos, adoptar decisiones jurídicamente obligatorias⁴⁶.

El proyecto del Decr. *Christus Dominus* enviado a los Padres conciliares el 27-IV-1964 hace un resumen de las opiniones expuestas hasta ese momento: «Se ha discutido ampliamente en el aula conciliar —afirma la *Relatio*— sobre si las decisiones de las Conferencias deben estar o no dotadas de obligatoriedad jurídica. Sobre esta materia son tres las opiniones que se han manifestado: hay quienes desean que puedan gozar de verdadera fuerza jurídica obligatoria, otros se inclinan porque tengan sólo carácter de obligación moral y, finalmente, hay quienes consideran que no se les debe atribuir ninguna eficacia obligatoria»⁴⁷.

Así las cosas, la Comisión conciliar competente optó por una solución que tuviera en cuenta esa diversidad de pareceres, por lo que matizó el texto estableciendo taxativamente⁴⁸ los casos en los que las

46. Para un estudio completo de esta materia es necesario investigar los trabajos de elaboración de varios documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Const. *Sacrosanctum Concilium*, sobre la Sagrada Liturgia —cronológicamente, el primer lugar donde comenzó a tratarse el tema—, la Const. dogm. *Lumen gentium* y el Decr. *Christus Dominus*. Vid. también G. FELICIANI, *Le Conferenze Episcopali*, Bologna 1974, especialmente pp. 353 ss. y 444 ss.; M. PETRONCELLI, *Osservazioni sulla natura e competenza delle Conferenze Episcopali*, en «Il diritto ecclesiastico» 1975, pp. 57 ss.; L. UCCELLA, *Le Conferenze Episcopali in diritto canonico*, Napoli 1973.

47. *Schema Decreti «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia»*, 27-IV-1964, *Relatio*, p. 43 (*Acta Synodalia...*, III, II, pp. 54 s.).

48. *Schema Decreti «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia»*. *Textus emendatus et relationes*, 1964, p. 95 (*Acta Synodalia...*, III, VI, pp. 199 s.).

decisiones de una Conferencia pueden tener fuerza jurídica obligatoria, así como los requisitos necesarios para su elaboración. En concreto: «Las decisiones de la Conferencia Episcopal, siempre que hayan sido adoptadas legítimamente al menos por dos tercios de los votos de los Prelados que son miembros de la Conferencia y gozan en ella de voto deliberativo, y después de haber sido refrendadas (*«recognitae»*) por la Santa Sede, sólo obligan jurídicamente en los casos en los que lo prescribe el derecho común o lo establece un mandato peculiar de la Santa Sede, dado *motu proprio* o a petición de la misma Conferencia»⁴⁹.

Por tanto, para la obligatoriedad jurídica de una decisión de la Conferencia Episcopal es necesario, como requisito previo, que haya sido adoptada *legítimamente*: esta legitimidad se refiere tanto a su conformidad con la recta doctrina y con las normas vigentes de rango superior, como al procedimiento que se haya seguido en su elaboración: voto secreto, cuando así lo prescriben los estatutos de la Conferencia, etc. Y es preciso además que la decisión de que se trate haya sido aprobada al menos por dos tercios del total de los miembros de la Conferencia con voto deliberativo: no bastarían los dos tercios de los presentes en una reunión⁵⁰. Tampoco puede la Conferencia delegar este poder en el Consejo de presidencia, o en alguna de sus Comisiones internas⁵¹.

Esas decisiones han de ser siempre refrendadas (*«recognitae»*) por la Santa Sede. En este caso, la palabra *recognitae* significa que ha de ser informado el organismo competente de la Sede Apostólica, y que éste —por lo menos— en su respuesta explícita no manifieste objeciones contra la decisión tomada⁵².

49. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 38, 4.

50. *Schema* cit., en la nota 48, pp. 86-87 y 96 (*Acta Synodalia...*, III, VI, pp. 191 y 197).

51. «Utrum potestas legislativa quae, ad normam Decreti Ss. Concilii Vaticani II *Christus Dominus*, n. 38, § 4 intra certos limites tribuitur Conferentiis Episcoporum, delegari possit Commissionibus episcopalibus quae in ipsis Conferentiis constituuntur. Commissio Centralis coordinandis post Concilium laboribus et Concilii Decretis interpretandis, re mature perpensa in Coetu, die 24 mensis maii 1966 habito, respondendum censuit: negative» (interpretación auténtica aprobada por el Papa el 10-VI-1966: AAS 60, 1968, p. 361). Vid. también las respuestas auténticas del 5-II-1968: AAS 60 (1968), p. 361 y del 21-XII-1979: AAS 72 (1980), p. 106.

52. Esta *recognitio* parece equivaler a la establecida en el CIC para los decretos de los Concilios particulares, que no deben promulgarse antes de que hayan sido «a Sacra Congregatione Concilii expensa et recognita» (can. 291 § 1). Se trata sólo de un examen de esas decisiones por parte de la S. Congregación, para dar el *nihil obstat* como requisito para que se promulguen, sin que por

17. Con las condiciones expuestas, las decisiones de la Conferencia pueden tener fuerza jurídica obligatoria exclusivamente («dumtaxat») en dos casos:

a) En primer lugar, cuando así lo prescribe el derecho común, al establecer, p. ej. que una determinada norma o un documento litúrgico, etc., entrarán en vigor en la fecha que para el territorio determine la Conferencia Episcopal; o también cuando, en determinadas materias, el derecho común establezca que, sobre esas cuestiones, la Conferencia puede o debe dictar normas más detalladas de derecho particular;

eso pasen a ser leyes de la Santa Sede. La S. C. del Concilio, en la causa «Dioecesis N.», del 19-II-1921, recuerda que: «Exploratum hodie apud omnes est potestatem legislativam Episcoporum huc pertinere ut legibus suis quasi perficiant quod ius commune reliquerit minus definitum et sancitum, ita ut nihil ab ipsis contra ius commune vel eius directionem statui possit... Quod valet etiam de decretis Concilii provincialis, quae non sunt nisi leges plurium Episcoporum. Namque approbatio S. Sedis, quae mere condicio est legitimae promulgationis, nullam positivam S. Sedis auctoritatem ad ista decreta superaddit» (AAS 13, 1921, p. 228; el subrayado es nuestro). Nótese que la S. Congregación designa con el nombre de *approbatio* a lo que en el CIC se llama *expensio et recognitio*. Lo expuesto hasta ahora en esta nota no contradice a la idea expresada en la nota 27, donde se pretende únicamente afirmar que la jurisdicción de los organismos intermedios entre el Papa y el Obispo diocesano no es originaria, sino recibida por comunicación del Romano Pontífice, aunque resida en el sujeto que la detenta como una potestad que, a efectos jurídicos, puede calificarse de ordinaria. Sobre el rango que corresponde a las decisiones de una Conferencia Episcopal dentro de la jerarquía de normas, sostuve hace algunos años que, cuando una disposición jurídica de la Conferencia se da en virtud de un *mandatum* otorgado por la Santa Sede, «si tratta, allora, di un atto specifico della Sede Apostolica, che impone questa norma su tutto il territorio: dovrà allora qualificarsi come una *legge particolare emanata dal legislatore supremo*» (J. L. GUTIÉRREZ, *La capacità normativa delle Conferenze Episcopali*, en «Studi Cattolici», n. 190, dic. 1976, p. 779). Matizando más este concepto, considero que la fuente de producción de esas normas es la Conferencia —no en virtud de la suma de potestades de cada uno de sus miembros, sino como efecto del poder que, con la técnica de la desconcentración, le atribuye la autoridad suprema—, y son por tanto de rango inferior a las que provienen de la Santa Sede. La S. C. para los Obispos, en el Directorio «De pastorali ministerio Episcoporum», 22-II-1973, n. 212, a, dice: «Decisiones, a Conferentia legitime latas et ab Apostolica Sede recognitas, tamquam vim legis a suprema Ecclesiae auctoritate habentes, fidei obsequio Episcopus accipit et executioni mandat». Esta frase parece indicar que, como efecto de la *recognitio* por la Santa Sede, el Directorio atribuye a las decisiones de una Conferencia el valor de leyes de la suprema autoridad, «*vim legis a suprema Ecclesiae auctoritate habentes*»: no parece, sin embargo, que el texto de un Directorio sea un elemento de gran peso en una cuestión que afecta precisamente a la jerarquía de normas.

b) Cuando esa decisión de la Conferencia queda ratificada mediante un mandato peculiar de la Santa Sede, dado *motu proprio* o a petición de la Conferencia interesada⁵³. Queda claro que, en este caso, la decisión carece de eficacia y no puede promulgarse antes de que la Santa Sede haya otorgado ese mandato peculiar⁵⁴.

c) *Las Conferencias Episcopales después del Concilio Vaticano II*

18. Hemos visto que, de acuerdo con los textos conciliares, la Conferencia Episcopal se configura como una reunión en la que prevalece el intercambio de opiniones y de experiencias, aunque podrán también adoptarse decisiones de carácter jurídico «in paucis ac bene definitis materiis», según afirmaba la Comisión que elaboró el Decr. *Christus Dominus*⁵⁵; y también hemos expuesto algunas reflexiones sobre el hecho de que la Conferencia tiende a substituir a los Concilios particulares.

¿Cuál ha sido su evolución en los años transcurridos desde enton-

53. El *mandatum* o capacitación para obrar es formalmente distinto de la *recognitio*. Con él se confiere a la Conferencia Episcopal un poder de que carece: el de dictar normas para un caso concreto, normas que habrán de someterse a la *recognitio*.

54. La certeza del derecho exige que, al promulgarse esas normas, conste específicamente su aprobación por la Santa Sede. Para las traducciones de textos litúrgicos a lenguas vernáculas, la S. C. para el Culto Divino da prescripciones más detalladas: debe indicarse no sólo la aprobación de la Santa Sede —especificando si es definitiva o sólo *ad interim*—, sino también la fecha y número de protocolo de esa aprobación (cfr. «Notitiae», n. 43, nov.-dic. 1968, p. 365; n. 44, enero-feb. 1969, pp. 3 ss.; n. 45, marzo 1969, p. 68; n. 104, abril 1975, pp. 99 ss.). Por otra parte, es también lógico que esas disposiciones de la Conferencia no se promulguen ni se divulguen antes de su *recognitio*: si de algún modo se hicieran públicas antes de llegar a la Santa Sede, la *recognitio* difícilmente pasaría de ser una mera formalidad, o se colocaría a la Sede Apostólica en la enojosa situación de tener que modificar una decisión de una Conferencia que ya se ha divulgado. Para no alargar más estas consideraciones, me limito sólo a apuntar un problema: si la fuente de producción de esas decisiones es la Conferencia, ¿qué sucede en el caso de que la Santa Sede otorgue la *recognitio* proponiendo a la vez enmiendas? ¿Puede procederse a su promulgación con esas enmiendas, o necesita ser aprobado el nuevo texto por dos tercios de los miembros de la Conferencia que gocen de voto deliberativo?

55. *Relatio* al proyecto «De Episcopis ac de dioecesium regimine», 1963, p. 20 (*Acta Synodalia...*, II, V, p. 36). En el «Textus recognitus et modi», de 1965, donde ya se contiene el texto definitivo, la Comisión aclara, respondiendo a la observación de un Padre Conciliar, que «Satis consultum est unanimitati obtinendae sive per numerum perexiguum argumentorum definiendorum, sive per magnum numerum suffragiorum praerequisitorum» (*Modus* n. 26 al Cap. III: *Acta Synodalia...*, IV, II, p. 612).

ces? En aras de la brevedad, me limitaré a aportar algunos datos sobre dos aspectos concretos: los trabajos para la redacción del nuevo CIC y la situación actual de las Conferencias Episcopales⁵⁶.

19. La Comisión Pontificia para la revisión del CIC —o mejor, los grupos de estudio constituidos en su seno para elaborar las distintas partes del nuevo cuerpo legal, coordinados en su trabajo por el Cardenal Presidente y los dos Secretarios de la Comisión—, fue preparando por separado los proyectos del futuro Código. A partir de 1972, esos proyectos o *schemata* se enviaron a los Obispos de todo el mundo y a organismos cualificados, para que expresaran su parecer sobre los mismos⁵⁷.

Acerca del tema que nos ocupa, bastantes opiniones coincidían en afirmar que, en esos proyectos, se atribuía un poder demasiado grande a las Conferencias Episcopales, con un doble inconveniente: trabajo excesivo para las mismas Conferencias, incapaces de llevar a cabo

56. Es también un valioso instrumento de información el trabajo de la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1969, publicado por mandato de Pablo VI: I. *Relatio doctrinalis de collegialitate Episcoporum*. II. *Relatio de arctiore coniunctione Episcoporum Conferentias inter et Sanctam Sedem*. III. *Relatio de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias*, ed. Vaticana 1969 (publicado también en el *Enchiridion Vaticanum*, III, 1653-1744). Entre las propuestas sometidas a la consideración de este Sínodo figuran las de algunas Conferencias que consideran oportuno ampliar el campo de sus propias atribuciones, e incluso constituir en su seno organismos paralelos a los distintos Dicasterios de la Curia Romana (cfr. *Enchiridion Vaticanum*, III, especialmente nn. 1692 y 1699). Con esta propuesta parece apuntarse a configurar la Conferencia Episcopal también como una especie de Curia nacional, intermedia entre la Curia Romana y el Obispo diocesano. Esta opinión no se ha extendido, como se desprende de lo expuesto en el n. 15 de este trabajo, y también de que, el 15-II-1980, en la reunión de la Comisión Pontificia para la revisión del CIC, los Consultores —cuya tarea era en ese momento revisar y modificar los proyectos de cánones precisamente para que respondiesen a las observaciones enviadas por los Obispos de todo el mundo— se mostraron unánimemente de acuerdo «nell'auspicare che le Conferenze Episcopali non diventino organi burocratici con eccessive altre funzioni di facoltà, una specie di Curia intermedia tra la Curia Romana e la Curie diocesane» («Communications» 12, 1980, p. 263). Vid. también la obra en colaboración de varios autores «Las Conferencias Episcopales hoy», Salamanca 1977.

57. Sobre la legislación específica acerca de las Conferencias Episcopales se informa en «Communications» 4 (1972), pp. 48-50 y 12 (1980), pp. 262-269. Sin embargo, la opinión de los Obispos y de los organismos a los que se pidió el propio parecer se refleja más claramente en las observaciones que hacen a uno u otro proyecto de canon de los distintos Libros del nuevo Código, como se desprende de las actas publicadas en «Communications». Acerca del sistema de trabajo de la Comisión Pontificia, cfr. el informe del Card. P. Felici, el 21-X-1980, al Sínodo de los Obispos: «Communications» 12 (1980), pp. 220-225.

todas las determinaciones de derecho particular que se dejaban a su competencia⁵⁸; y, por otra parte, disminución de la potestad que compete al Obispo en su propia diócesis. Por este motivo, muchos manifestaron el deseo de que el derecho común fuera más completo, y sólo en casos contados se remitiese a las Conferencias la determinación de sus normas.

Tal estado de cosas se refleja con claridad en el discurso pronunciado por el Card. Pericle Felici, el 10-X-1976, en la sesión de apertura del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, que tuvo lugar en la Universidad de Navarra. Afirma el Presidente de la Comisión Pontificia para la revisión del CIC:

«Puede decirse que las Conferencias Episcopales han conseguido su importancia o la han aumentado a raíz del Concilio Vaticano II: se les ha atribuido también que, en algunos casos, puedan dictar leyes. Sin embargo, a la hora de la verdad, son bastantes las dificultades, no sólo porque muchos Obispos —como es bien sabido— comienzan a quejarse de que se eleva a la Conferencia Episcopal lo que les corresponde a ellos por derecho, sino sobre todo porque las Conferencias Episcopales no están constituidas en todas partes de manera que sean capaces de ejercer esta tarea de elaborar leyes, aunque es de desear que lleguen a conseguirlo»⁵⁹.

Como consecuencia de las observaciones recibidas, los Consultores encargados de la elaboración de la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, en la reunión celebrada del 23 al 27-II-1977, consideraron oportuno introducir en su texto un nuevo canon, en el que se dice:

58. Este inconveniente se presenta tanto en las Conferencias con gran número de miembros, en las que —si se desciende a demasiado detalle— será difícil llegar a una legislación particular común que responda a las necesidades de todas las Iglesias particulares interesadas, como también en aquellas otras Conferencias —son mayoría— que constan de pocos Obispos y no pueden contar con la colaboración de peritos en las distintas ramas jurídicas: cfr. el texto citado en la nota 59. Vid. también las intervenciones en el Sínodo de los Obispos del Card. A. Poma y de Mons. R. Arrieta Villalobos: «Communicaciones» 6 (1974), p. 165 y 9 (1977), pp. 216 y 220.

59. P. FELICI, *Norma giuridica e «pastorale»*, en «La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico», Pamplona 1979, vol. I, pp. 19-20. Al informar sobre la elaboración del nuevo CIC en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos de 1977, respondiendo al Card. A. Poma, afirma el Card. P. Felici: «In schematibus quae proposita iam sunt et Vestra Em.tia potuit videre, multae facultates tributae sunt Conferentiis Episcopalibus. Attamen ex observationibus nobis missis a variis organis, con-

«Quedando en pie la ley según la cual corresponde como norma ordinaria al Obispo diocesano ejercer la potestad legislativa para su propia diócesis, sin embargo, para fomentar la fe, tutelar las costumbres y establecer u observar una disciplina común en las distintas Iglesias particulares, los Obispos ejercen de manera colegial su potestad legislativa en los Sínodos y Concilios particulares, así como también —aunque sólo en casos determinados— en las Conferencias Episcopales...»⁶⁰.

Puede afirmarse, por tanto, que el nuevo CIC tiende a reforzar la potestad de cada Obispo en su diócesis, atribuyendo carácter subsidiario a la intervención de la Conferencia Episcopal, con un texto cuidadosamente matizado en lo que se refiere específicamente a su potestad legislativa. Sin embargo, considero que el dato más importante no reside en el texto que acabo de transcribir o en otras declaraciones generales, sino en las correcciones que, de acuerdo con esos principios, se fueron introduciendo en los distintos proyectos de cánones después de recibir el parecer de los Obispos de todo el mundo.

20. Se confirma lo anterior en la Alocución que Pablo VI dirigió el 25-III-1971 a los Delegados de las Conferencias Episcopales de Europa, donde hacía notar cómo en la sociedad civil se advierte una tendencia a que los organismos superiores absorban y dirijan imperativamente a los inferiores; y añadía por lo que se refiere a la Iglesia:

«A este modo de obrar se opone no sólo el principio de subsidiariedad rectamente entendido, sino la misma naturaleza de la Iglesia. Para nosotros, la Iglesia local, agrupada al-

cludere potuimus rite cavendum esse ne plura committantur Conferentiis Episcopalibus» («Communicationes» 9, 1977, pp. 216-217). Vid. también las puntualizaciones de Mons. W. Onclin, Secretario de la Comisión, que, a ruego del Card. P. Felici, completa la respuesta (*ibid.*). En este sentido, expresa su preocupación el Card. P. GUYON, *Les relations entre la diocèse et la Conférence Episcopale*, en «Année Canonique» 22 (1978), pp. 1-23. Vid. también G. MARIANI, *Le Conferenze Episcopali nel loro corso evolutivo*, en «Palestra del Clero», n. 10, 1981, pp. 1-6 de la separata.

60. «Firma manente lege, vi cuius regula generali unius Episcopi dioecesan est, pro sua cuiusque dioecesi, legislativam potestatem exercere, ut tamen fidei incrementum morumque integritas foveatur atque communis in diversis Ecclesiis particularibus disciplina inducatur vel servetur, Episcopi collegiali modo potestatem legislativam exercent in Synodis, Conciliis particularibus necnon certis dumtaxat in casibus in Episcoporum Conferentiis...» («Communicationes» 9, 1977, p. 292; cfr. también «Communicationes» 13, 1981, pp. 77 y 108).

rededor de su Obispo, que se debe a toda la Iglesia y está unido en comunión con el Romano Pontífice, constituye la estructura primaria del Cuerpo místico»⁶¹.

21. Sobre la situación actual de las Conferencias Episcopales⁶², bastará recordar que dependen de las S.C. para los Obispos, para las Iglesias Orientales o para la Evangelización de los pueblos y, en algunos casos, de estos dos últimos Dicasterios (Etiopía, India y Países Arabes). La mayor parte tiene sus estatutos aprobados *ad experimentum*⁶³ o *ad quinquennium*, y sólo algunas gozan de estatutos definitivos⁶⁴. Parece claro por estos datos que aún no ha llegado a perfilarse su estructura con todos los matices necesarios, y que en su evolución jugarán un papel decisivo los estatutos, todavía en fase de estudio en el momento presente. En este proceso, que mira hacia una configuración definitiva de las Conferencias Episcopales, tendrá gran importancia el impulso orientador de las S. Congregaciones Romanas que hayan de aprobar los estatutos, siempre en íntima colaboración con las Conferencias interesadas, ya que nunca se podrá llegar a una uniformidad o a un trasplante automático de los estatutos de unas Conferencias a otras, por la diversidad de situaciones en las que cada una se encuentra: número de miembros —que oscila entre unos pocos y varios centenares—, legislación estatal respecto a la Iglesia, porcentaje de católicos en la nación y sus relaciones con miembros de otras religiones o no creyentes, problemas pastorales concretos que deben resolverse, etc.

Para completar este panorama, añadiré que se han constituido

61. «L'Osservatore Romano», 26-III-1971, p. 1. Refiriéndose de modo más general a las estructuras pastorales en todos sus grados, Pablo VI decía en la Alocución a la S. R. Rota del 8-II-1973: «Ma parlare oggi di *Pastorale* comporta un altro significato, che ha un legame profondo col compito pastorale dell'episcopato e la missione apostolica della Chiesa. La Pastorale è l'organizzazione ben ponderata dell'apostolato... non può diventare né un vincolo, né una nuova forma d'autoritarismo, di dominio o di centralizzazione eccessiva» (AAS 65, 1973, p. 102).

62. Los datos que siguen están tomados del *Anuario Pontificio*, 1981, pp. 934 ss. Sobre el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, cfr. G. FELICIANI. *Il consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa*, en «Ius Canonicum» 19 (1979), pp. 29-38.

63. Entre ellas, las de Alemania, el 23-X-1976; Inglaterra y Gales, el 15-VI-1968; Italia, el 19-XI-1977; Polonia, el 15-III-1969; Portugal, el 13-VII-1977; Estados Unidos, el 14-II-1976; etc.

64. Las de Argentina, el 9-III-1973; Brasil, el 19-I-1980; España, el 5-II-1977; Francia, el 29-XI-1975; etc.

en algunos lugares Conferencias Episcopales regionales⁶⁵, además de la Conferencia nacional; y que hay siete *Reuniones o Federaciones Internacionales de Conferencias Episcopales* y, además, el *Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa*, el *Consejo Episcopal Latinoamericano* (CELAM) y el *Secretariado Episcopal de América Central y Panamá*.

III. EL OBISPO DIOCESANO EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL

22. Pasamos ahora a determinar los rasgos característicos de la función que desempeña un Obispo diocesano en la Conferencia Episcopal de la que es miembro.

El problema puede plantearse en los siguientes términos: ¿qué parte de su tiempo debe dedicar el Obispo a sus deberes, respectivamente, en la diócesis y en la Conferencia Episcopal?

Para centrar correctamente el tema, es necesario ante todo determinar qué relaciones existen entre la tarea de Pastor en la propia diócesis y la participación en la Conferencia Episcopal: ¿se trata de dos quehaceres que se yuxtaponen, o son más bien aspectos o facetas de una misma función?

Por la consagración sacramental y la comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros, el Obispo se hace miembro del Colegio Episcopal⁶⁶, y participa por tanto de la *sollicitudo omnium Ecclesiarum*⁶⁷. Sin embargo, la tarea primordial de un Obispo diocesano es regir la diócesis que se le ha encomendado, consciente de que —con palabras de la Const. dogm. *Lumen gentium*— «gobernando bien su propia Iglesia, en cuanto que es una porción de la Iglesia universal, colabora eficazmente al bien de todo el Cuerpo místico, que es también *corpus Ecclesiarum*»⁶⁸. En otras palabras, la aportación primaria de un Obispo a la Iglesia universal se canaliza de hecho a través de su servicio

65. Concretamente, en Italia son 17 las Conferencias Episcopales regionales, correspondientes a las respectivas *regiones pastorales* (cfr. *Annuario Pontificio*, 1981, pp. 980-983), llamadas hasta hace poco *regiones conciliares* (cfr., p. ej., *Annuario Pontificio*, 1976, pp. 958-961).

66. Cfr. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 22 y *Nota explicativa praevia*, n.º 2.

67. Cfr. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 23. Vid. S. PETTINATO, *Sollicitudo pro universa Ecclesia. Profili canonistici*, Catania 1981.

68. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 23.

a la Iglesia particular que se ha confiado a su cuidado⁶⁹, y que debe entenderse no como un recinto cerrado, sino como una *porción de la Iglesia universal*, en la que se hace verdaderamente presente y actúa —*in qua vere inest et operatur*— la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica⁷⁰, que subsiste en las Iglesias particulares y de ellas consta⁷¹; una diócesis no puede concebirse si no es atendiendo a sus dos ejes de coordenadas: porción determinada del pueblo de Dios con vida propia, unida a su Obispo; y, a la vez e inseparablemente, porción y manifestación de la Iglesia universal.

Ahora bien, especialmente en nuestro tiempo —ya lo hemos hecho notar⁷²—, son bastantes las ocasiones en las que los Obispos no alcanzan a cumplir conveniente y fructuosamente su misión si no es en estrecha unidad con otros Obispos. Por esta razón se afirma en la Const. dogm. *Lumen gentium* que las asambleas episcopales pueden aportar hoy una ayuda multiforme y fecunda para dar un cauce efectivo y concreto al sentido de unión colegial o *collegialis affectus*⁷³. De este modo, deben entenderse las Conferencias Episcopales como una prolongación de la tarea que el Obispo ha de desempeñar en su propia diócesis, de manera que, en unión con otros Obispos a los que se encuentra especialmente vinculado por la proximidad geográfica y por bastantes problemas pastorales comunes, realicen todos juntos y en íntima comunión, para bien de las Iglesias particulares que se les encomiendan, lo que cada uno de ellos no lograría alcanzar por separado. No se trata, pues, de dos tareas separadas —el gobierno de la diócesis y la participación en la Conferencia Episcopal—, sino de ejercer con eficacia la función pastoral en la propia diócesis y, para esto, colaborar con los demás hermanos en el episcopado, lo-

69. Prescindo aquí de la posibilidad de que se le confíen además encargos supradiocesanos o relacionados con el gobierno de la Iglesia universal, p. ej., el de miembro de una Sagrada Congregación (cfr. nota 21 de este trabajo) o su participación en el Sínodo de los Obispos: en este caso sí se trataría de una tarea añadida a la que le es propia por ser Obispo de una diócesis determinada.

70. Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 11.

71. «Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formati, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit» (CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 23). Sobre la fórmula «in quibus et ex quibus», cfr. KL. MÖRSBORG, *Das oberste Hirtenamt des Papstes im Lichte des Zuordnungsverhältnisses von Gesamtkirche und Teilkirche*, en «Mélanges Mgr. H. Wagnon», Louvain 1976, pp. 329 ss.; W. BERTRAMS, *De analogia quoad structuram hierarchicam inter Ecclesiam universalem et Ecclesiam particularem*, en «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 56 (1967), pp. 267-308.

72. Cfr. n. 15 de este trabajo y CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 37.

73. Cfr. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 23.

grando de este modo un enriquecimiento mutuo mediante el intercambio de experiencias y de pareceres, así como también a través de medidas o de decisiones disciplinarias adoptadas de común acuerdo.

Entendida en estos términos, la labor dentro de la Conferencia Episcopal se encuadra y se configura como *una parte de la tarea diocesana* que incumbe al Obispo.

La Conferencia Episcopal no es, por tanto, un organismo que se yuxtapone a la función diocesana del Obispo, sino, al contrario, una parte de ésta, y como tal debe considerarse.

Lo anterior no significa que, con una visión reductiva, cada Obispo en la Conferencia haya de velar exclusivamente por los intereses de su Iglesia particular, sino que, expresando esta misma idea de manera positiva, el trabajo del Obispo en la Conferencia es necesario para el buen gobierno de su diócesis, a la vez que redundando en beneficio de otras Iglesias particulares. Carecería, por tanto, de sentido, plantear el trabajo en la diócesis y en la Conferencia Episcopal como una disyuntiva, en la que uno de los términos excluya al otro o le reste eficacia⁷⁴.

23. Así las cosas, podemos afirmar que la tarea pastoral del Obispo en su diócesis incluye necesariamente la participación activa en los trabajos de la Conferencia Episcopal, a la vez que configura sus límites: límites por parte de la misma Conferencia, la cual debe sólo ocuparse de aquellos asuntos que necesitan ser tratados por ella, para bien del conjunto de las diócesis; y límites también por parte de la dedicación personal de cada Obispo, que destinará a la Conferencia el tiempo requerido por la importancia de los problemas que deben tratarse en ella, importancia de la que da la medida el beneficio que de ahí se seguirá para su diócesis y para las demás, es decir, atendiendo a las exigencias de su deber respecto a la Iglesia particular de la que es cabeza y, simultáneamente, a las de la comunión y sentido de unión colegial con los otros Obispos del territorio. Y, con las debidas proporciones, las mismas normas valen también para el funcionamiento de las Conferencias Episcopales regionales, en los lugares donde existan juntamente con la Conferencia nacional.

Este criterio da la medida práctica para la distribución del tiempo del Obispo entre los asuntos diocesanos y los que se refieren al estudio, preparación y posibles aportaciones a las sesiones plenarias

74. El Obispo «*prudencia pastorali ductus et amore incensus erga suam ipsius dioecesim, operam dat, ut Conferentia, meliore qua possit ratione, fines consequatur, ob quos est instituta*» (S. C. para los Obispos, *Directorio* «De pastoralis ministerio Episcoporum», 22-II-1973, n. 211, a).

de la Conferencia Episcopal y de sus Comisiones internas, de las que quizá es miembro⁷⁵. Las consideraciones expuestas pueden parecer teóricas, pero, en esta materia, no cabe una regla fija: basta pensar que también para el trabajo en su diócesis el Obispo ha de establecer una jerarquía de valores y un orden; y que, en última instancia, toda persona en esta tierra se encuentra vinculada por una serie de deberes, a los que debe dar la importancia que merecen, teniendo en muchos casos que postergar unos e incluso dejarlos de lado, para cumplir otros de más peso.

Abundando en lo anterior, sólo parece necesario añadir que el Derecho impone al Obispo el deber de residencia en su diócesis, con la finalidad evidente de que desempeñe en ella su tarea pastoral: no respondería a la *ratio legis* que, aun sin ausentarse de la diócesis, se dedicase de manera preponderante o casi exclusiva a las materias relacionadas con la Conferencia, con detrimento del cuidado debido a los asuntos diocesanos. Es cierto que el Concilio Vaticano II ha creado la nueva figura de los Vicarios episcopales, a quienes puede el Obispo encomendar parte del trabajo que le compete⁷⁶, pero hay en el ministerio pastoral del Obispo diocesano un aspecto intransferible, que es precisamente su característica más propia y exige la presencia personal y activa: ser cabeza de la diócesis y centro de la comunión en la misma.

Pero, a la vez, existe el peligro de un exceso opuesto: la participación meramente pasiva en la Conferencia, por emplear todo el tiempo disponible en lo que pertenece de manera exclusiva a la propia diócesis. O —sería otra forma de dejación de un derecho-deber— cabe también la postura de quien espera ver resueltos por la Conferencia los problemas que se presenten, sin dedicarles el estudio debido. Sobre este punto, el 6-VI-1975, hacía notar Pablo VI a los Obispos italianos reunidos en la XII sesión de su Conferencia nacional:

«Podría quizá insinuarse en el Pastor de almas una tentación sutil, que fácilmente encontraría atenuante en el exceso de trabajo: 'Ya hay una Conferencia, ya hay quien cuida de los asuntos'. Es la tentación de trasladar al organismo colegial lo que sólo la personal responsabilidad puede realizar. Todos estamos convencidos de que es así, ¿no es verdad? Cada

75. El Obispo «*spiritu servitii impulsus, Conferentiae praesidi proponit quæstiones solvendas, difficultates superandas, errores praecavendos, incepta suscipienda ad animarum commune bonum*» (*ibid.*, n. 211, f).

76. Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, n. 27; PABLO VI, Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, 6-VIII-1966, I, n. 14.

Obispo conserva íntegramente su responsabilidad, cada uno ha de proponerse resolver personalmente, con la ayuda de su Presbiterio, los problemas propios e inmediatos, puesto que cada uno será juzgado en la medida de la generosidad y del empeño con que haya correspondido a la gracia de estado»⁷⁷.

Se trata, pues, de una materia delicada, en la que es preciso un ponderado sentido de equilibrio, tanto por parte de la Conferencia como de cada uno de sus miembros, de manera que el Obispo diocesano no se vea obligado a descuidar, o a cuidar menos, sus deberes con la diócesis, por tener que dedicar demasiado tiempo a los asuntos de la Conferencia; o que, por el contrario, las decisiones y deliberaciones de la Conferencia sean fruto del estudio de unos pocos, por no disponer los demás de tiempo para considerarlas con la debida atención. Y, para resolver los posibles problemas, habrán de emplearse los oportunos medios técnicos, pero sin olvidar nunca un elemento al que hace referencia Pablo VI en el discurso que acabo de citar: la gracia de estado, que contribuirá a que se adopte en cada caso la solución más oportuna y que mejor responda al bien de las almas y al servicio ministerial que deben prestar los Obispos.

IV. EL OBISPO DIOCESANO Y LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

24. Llegamos así al último punto que deseo tratar: las consecuencias que se siguen en cada diócesis como fruto de las deliberaciones de la Conferencia Episcopal.

Estas deliberaciones pueden ser de índole muy distinta: desde un simple intercambio de experiencias y de pareceres hasta normas jurídicas que revistan carácter obligatorio. Por eso, antes de considerar cada uno de los supuestos, conviene detenerse en el principio fundamental que determina la aceptación de las resoluciones de la Conferencia por parte de los Obispos interesados. Y este principio se desprende de la naturaleza misma de la Conferencia, que —como hemos visto— es una expresión institucionalizada de la unidad colegial o *collegialis affectus* que vincula entre sí a los Obispos. Por eso, sus actos —independientemente del grado de obligatoriedad jurídica que revistan— habrán de ser recibidos con la consideración que me-

77. AAS 67 (1975), p. 378.

rece la fuente de la que proceden, teniendo también en cuenta las exigencias prácticas de la comunión con los demás hermanos en el episcopado. No es ésta una reflexión de carácter exclusivamente moral, puesto que la unidad y la comunión son valores que también llevan consigo unas consecuencias jurídicas⁷⁸. Quien —formulando una hipótesis— aceptase por sistema solamente aquello que se impone de modo obligatorio, dejando de lado lo demás, tendría que ser justamente tachado de incumplimiento de los deberes no sólo morales sino también jurídicos de su cargo, puesto que la unidad y la comunión están muy por encima de muchas normas en las que se prescribe que algo debe hacerse u omitirse, y reclaman por tanto una tutela jurídica proporcionada.

Unicamente con esta disposición inicial —y cuando no se trate de normas jurídicas obligatorias, por haber sido promulgadas con la *recognitio* de la Santa Sede—, se puede y se debe valorar la oportunidad de aplicar o no una deliberación concreta en la propia diócesis, así como la medida concreta de su aplicación; y ha de tenerse siempre presente que la unidad y la comunión —por ser bienes superiores— pueden exigir a veces que se adopte y se haga propia una línea de conducta que quizá en otro caso no se hubiera seguido; o que se proceda con la debida prudencia, sin dar jamás lugar a la impresión de falta de unidad, cuando se considere que una recomendación de la Conferencia, sobre todo si se ha divulgado en los medios de información, no es necesaria o conveniente para la propia diócesis. El Directorio sobre el ministerio pastoral de los Obispos, promulgado el 22-II-1973 de acuerdo con el mandato contenido en el Decr. *Christus Dominus*, n. 44, establece sobre este punto:

«Por razón de la unidad y caridad con sus hermanos, el Obispo ordinariamente hace suyas las decisiones y normas de la Conferencia que jurídicamente no tienen fuerza obligatoria, a no ser que obsten graves razones, que él mismo haya ponderado en la presencia del Señor. Estas decisiones y normas son promulgadas en la diócesis por el Obispo, en nombre propio y con autoridad propia, puesto que la Conferencia no puede limitar la potestad que cada Obispo desempeña personalmente en nombre de Cristo»⁷⁹.

78. Así, p. ej., entre las causas de remoción de un párroco, el proyecto de nuevo CIC contempla el «modus agendi qui ecclesiali communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat» («Communicationes» 11, 1979, p. 287).

79. S. C. para los Obispos, *Directorio*, cit., n. 212 b.

25. Con esta necesaria puntualización, podemos detenernos brevemente en los distintos supuestos que se presentan:

a) En primer lugar, deben observarse en cada diócesis las decisiones de la Conferencia que cumplan los requisitos para estar dotadas de fuerza jurídica obligatoria. Sobre esta materia, me limito a transcribir las palabras del Directorio citado sobre el ministerio pastoral de los Obispos:

«El Obispo recibe con fiel obsequio y ejecuta... las decisiones legítimamente adoptadas por la Conferencia y reconocidas por la Sede Apostólica, aun en el caso de que él antes no las compartiese o deba sufrir por esto algún trabajo; y procura que se observen en su diócesis»⁸⁰;

b) Mayor dificultad plantean las declaraciones doctrinales de la Conferencia Episcopal en materia de fe y costumbres o acerca de acontecimientos que afectan a la vida de la nación, sobre las que surge un doble problema:

— de una parte, los textos conciliares y las normas sucesivas de aplicación nada dicen sobre este tipo de declaraciones⁸¹. De aquí podría deducirse que el Concilio Vaticano II ha configurado las Conferencias como un elemento de unidad entre los Obispos diocesanos, de manera que cada uno pueda intercambiar pareceres con los demás hermanos en el episcopado antes de elaborar las puntualizaciones doctrinales que estime convenientes para su propia diócesis, sin que la Conferencia actúe en cuanto tal⁸²;

80. *Ibid.*, n. 212, a.

81. Es significativo que, en el último momento, se suprimiera la nota 1 al Cap. III del Decr. *Christus Dominus*, donde se hacía referencia explícita a esas declaraciones (cfr. nota 45 de este trabajo y texto correspondiente). Además, el Directorio de la S.C. para los Obispos, refiriéndose a las cartas pastorales de los Obispos, dice en el n. 60: «Cum vero quaestio pertractanda occurrit, quae fines dioecesis excedat, tunc sensus communionis hierarchicae cum Romano Pontifice ceterisque collegis necnon summum unitatis studium in bonum Ecclesiae universalis aut plurium Ecclesiarum particularium maximam ab Episcopo exquirunt prudentiam, ne aliis praeiudicium fiat». Como puede observarse, no se plantea la posibilidad u oportunidad de que esas materias se atribuyan a la Conferencia. Lo mismo sucede en el n. 44 c) del Directorio, donde se contempla un supuesto similar. Y, más en concreto, el n. 212 del mismo Directorio se limita a distinguir entre decisiones jurídicamente obligatorias y otras deliberaciones, a las que aplica el criterio de que el Obispo ordinariamente las hará suyas y las promulgará en la diócesis con su propia autoridad.

82. Pienso que así debe entenderse el silencio de los documentos conciliares y de las disposiciones sucesivas de la Santa Sede, puesto que la atribución de

— por otra parte, lo anteriormente expuesto no parece responder al modo de proceder actual, puesto que, en la práctica, las Conferencias emiten sus declaraciones en nombre propio, es decir, como actos de la Conferencia⁸³, y no como un proyecto de base que se entregue exclusivamente a cada Obispo, para que éste pueda hacerlo suyo y publicarlo en su diócesis tal como lo ha recibido o reelaborado y adaptado a las circunstancias de los fieles que se le han confiado. Esta situación de hecho lleva a que, por el momento, los requisitos para que la Conferencia promulgue declaraciones doctrinales se determinen en sus estatutos. Teniendo en cuenta que esas declaraciones revisten una trascendencia igual y a veces mayor que la de las normas de carácter jurídico —cuya elaboración, como hemos visto, sí está sometida a procedimiento—, no considero que sea ésta la solución más conveniente. Y hay que añadir que, en estos casos, las normas estatutarias no suelen prescribir la *recognitio* del documento por parte de la Santa Sede, con lo que se incurre en una notable contradicción: las deliberaciones —tanto disciplinares como doctrinales— de un Concilio particular han de someterse a la *recognitio* de la Santa Sede, mientras que, si proceden de la Conferencia Episcopal, esas mismas deliberaciones sólo necesitan el refrendo de la Sede Apostólica cuando su contenido sea disciplinar⁸⁴.

Así las cosas, y para mantenernos dentro de la línea temática correspondiente a este apartado —es decir, la aceptación y aplicación en la propia diócesis de las deliberaciones legítimas de la Conferencia Episcopal por parte de cada Obispo—, cuando se trate del supuesto al que me estoy refiriendo en este momento sólo cabe la posibilidad de remitir al principio fundamental de comunión y unidad colegial con los demás hermanos en el episcopado, evitando cuidado-

esta capacidad a la Conferencia lleva consigo, de hecho, un límite a la potestad del Obispo diocesano en su propia diócesis, y la norma debe por tanto interpretarse estrictamente (cfr. CIC, can. 19).

83. Por citar un ejemplo, M. ZALBA recoge 38 declaraciones en las que otras tantas Conferencias Episcopales presentaban y comentaban a los fieles la Enc. *Humanae vitae* (Las Conferencias Episcopales ante la «*Humanae vitae*», Madrid 1971). También en «L'Osservatore Romano» se publican con cierta frecuencia declaraciones de Conferencias Episcopales sobre distintos temas. Cfr. también nota 45.

84. El problema adquiere nuevos matices cuando el documento en cuestión contiene indicaciones pastorales, en las que ordinariamente, como consecuencia de una exposición doctrinal, se sugiere o prescribe —con todas las características prácticas de las normas disciplinares— una línea práctica de conducta para los interesados: asistencia a un matrimonio por parte del sacerdote, condiciones para la administración de determinados sacramentos, etc.

samente el peligro de que los fieles puedan pensar que los Obispos están divididos respecto a la materia de que se trate⁸⁵;

c) Puede suceder también que la Conferencia se plantee la oportunidad de adoptar una cierta línea de conducta respecto a determinadas cuestiones, o de seguir orientaciones directivas concretas para la actividad pastoral en el territorio, etc., sin que esas recomendaciones o ese juicio de conveniencia —por ser fruto de un intercambio de pareceres y de experiencias— consten formalmente en un documento aprobado por votación. Lógicamente, la ejecución de esas indicaciones corresponde en exclusiva a los Obispos, que las aplicarán

85. Por lo que se refiere al nuevo CIC, el canon previsto sobre esta materia establece:

«§ 1. *Episcoporum Conferentia decreta, vim quidem obligandi habentia, ferre tantummodo potest in causis in quibus ius commune id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius Conferentiae id statuerit.*

§§ 2-3. (Se establecen los requisitos de procedimiento: dos tercios de los votos y *recognitio* por parte de la Santa Sede).

§ 4. *In casibus in quibus nec ius commune nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem de qua in § 1 Episcoporum Conferentiae concesserit, singulis Episcopis dioecesanis, pro sua quisque dioecesi, competit decisio, nec nomine omnium Episcoporum, Conferentia eiusve Praeses agere valent nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint*» («Communicationes» 12, 1980, pp. 267-268).

Limitándome a apuntar los rasgos esenciales, para no alargar excesivamente esta nota, considero que el § 4 sienta un principio de carácter general, aplicable a todos los posibles supuestos: sólo en los casos taxativamente establecidos puede la Conferencia actuar en nombre de todos los Obispos, es decir, como Conferencia. Y estos casos se realizan cuando —como se dice en el § 1— así lo prescribe el derecho común o lo autoriza un mandato de la Sede Apostólica o, finalmente —a tenor del § 4—, están de acuerdo por unanimidad todos los miembros de la Conferencia (*omnes et singuli Episcopi consensum dederint*), sin necesidad de *recognitio* por parte de la Santa Sede en este último caso, a no ser que se trate de los decretos generales a los que se refiere el § 1.

Pienso que ésta es la interpretación correcta, puesto que: a) no parece congruente reducir los supuestos del § 4 a la elaboración de normas disciplinares, aspecto que queda perfectamente claro en el § 1, por lo que se debe concluir que el § 4 añade algo a lo dicho en el § 1, y lo que añade es precisamente un nuevo caso en el que la Conferencia puede actuar en cuanto tal: cuando sus miembros así lo decidan por unanimidad, cualquiera que sea la materia de que se trate: b) los redactores del nuevo Código han tenido en cuenta, y previsto en sus normas, la posibilidad de que las Conferencias deliberen sobre temas no sólo disciplinares, sino también doctrinales, etc. (cfr., p. ej., «Communicationes» 12, 1980, p. 270); c) toda atribución de competencia a un organismo superior —en este caso, a la Conferencia— supone una restricción de la potestad del Obispo diocesano, por lo que debe interpretarse estrictamente (cfr. CIC, can. 19).

según su prudencia y con su personal autoridad en las respectivas diócesis, si estiman conveniente hacerlas propias en todo o en parte;

d) Hay también ocasiones en las que determinados documentos proceden no de la Conferencia Episcopal, sino de alguna de sus Comisiones internas o del Consejo de presidencia: sucede esto a veces ante acontecimientos en los que, por una parte, parece requerirse una declaración de un grupo cualificado de Obispos y, por otra, no es posible o conveniente que se reúna el pleno de la Conferencia, que tampoco estaría en condiciones de redactar un documento con la rapidez exigida por las circunstancias. Como es obvio, el valor de esa declaración será exclusivamente el que proviene de la autoridad personal de quienes la firmen en cada caso.

CONCLUSIONES

26. De lo expuesto hasta ahora, podemos extraer, a modo de resumen, las siguientes conclusiones:

1. Atendiendo a su constitución divina, la potestad en la Iglesia sólo reside originariamente en la Autoridad Suprema y, para la respectiva Iglesia particular, en el Obispo diocesano.

2. La Conferencia Episcopal es una forma institucionalizada no de la colegialidad, sino de la comunión y unidad colegial (*affectus collegialis*) de los Obispos entre sí, que ejercen de este modo no una tarea yuxtapuesta a su función diocesana, sino una parte integrante del ministerio que les compete como Pastores de su propia diócesis.

3. La potestad de la Conferencia Episcopal —en los supuestos en los que puede ejercerla— no es originaria, sino recibida del Romano Pontífice mediante la técnica de la desconcentración. Esto no impide que dicha potestad sea, en términos jurídicos, ordinaria y propia, y que los actos que de ella provienen deban atribuirse a la Conferencia como a su fuente de producción.

4. El principio informador de la participación de cada Obispo en los trabajos de la Conferencia, así como de la aceptación de sus decisiones legítimas, es la comunión y la unión colegial con los demás hermanos en el episcopado.